

Defensa y disuasión: inversión estratégica para la soberanía chilena



Nelson Leiva Lertzundi

Cientista Político

Las recientes declaraciones de Antauro Humala, ex militar y político peruano, en las que plantea la "recuperación" de Arica y Tarapacá incluso por la vía armada, no pueden ser tomadas a la ligera. Constituyen un recordatorio de que las amenazas externas, aunque provengan de discursos radicales, deben ser enfrentadas con preparación estratégica y capacidad de respuesta.

Dicho de otra manera, la defensa geopolítica exige reconocer que la disuasión es tan importante como la acción. Un país que carece de armamento moderno y actualizado se expone a que sus enemigos perciban debilidad, lo que incrementa el riesgo de agresión. Desde esa postura, la fuerza militar no es solo un instrumento de combate, sino un objeto disuasivo cuyo mensaje es claro: "quien intente vulnerar nuestra soberanía, encontrará resistencia inmediata y contundente".

En este contexto, se justifica la inversión de Chile en capacidades defensivas y disuasivas: cazas F-16, sistemas de alerta temprana, tanques Leopard 2A4 y artillería autopropulsada, entre otros. Estas adquisiciones configuran una fuerza móvil y preparada para responder a escenarios de tensión.

Es importante subrayar que Chile no ha mostrado aspiraciones expansionistas ni una política exterior agresiva. Su tradición ha sido la defensa de la soberanía y la estabilidad regional. Sin embargo, las tensiones ocasionales con países vecinos hacen imprescindible mantener una estrategia que combine preparación militar, alianzas internacionales, manejo de los recursos naturales, capacidad política y económica.

En esa posición, incluso las agresiones retóricas deben ser atendidas con firmeza, pero sin iniciar las ofensivas. La respuesta chilena siempre debe orientarse hacia una protección integral de la soberanía. La planificación estratégica, silenciosa a la vez que efectiva, debe garantizar la paz y la seguridad nacional.

Además, frente a amenazas modernas el país debe prepararse, enfrentamientos que probablemente serán una combinación de armas convencionales y múltiples modalidades, como la guerra híbrida, el uso de drones o la ciberseguridad.

En consecuencia, resulta imprescindible seguir destinando recursos al armamento defensivo. La inversión, aunque elevada, debe entenderse como una prioridad estructural enfocada en fortalecer la seguridad, impulsar el desarrollo científico y tecnológico, reducir la dependencia externa y preparar al país para nuevas formas de conflicto.

Acá la lección es clara, es la preparación la mejor garantía frente a cualquier amenaza. Cuando algunos lo ponen en duda, los discursos retóricos que afirman que "afortunadamente somos solo eso" sirven como recordatorio de que no podemos relajarnos. La defensa debe ser, sin lugar a dudas, una prioridad dentro del gasto público.

Esto no significa descuidar áreas esenciales como salud, educación, vivienda o los problemas sociales y coyunturales, pero debemos comprender de una vez por todas que la defensa de la soberanía chilena, por razones geopolíticas, será siempre un problema estructural y no un mero accidente.

La defensa nacional también debe contemplar un componente educativo y cultural. La sociedad chilena necesita comprender que la seguridad no es solo tarea de las Fuerzas Armadas, sino un compromiso colectivo que involucra a ciudadanos, instituciones y empresas. La resiliencia nacional se construye con cohesión social, confianza en las instituciones y preparación frente a emergencias. Invertir en defensa significa también invertir en formación, investigación y cooperación internacional, fortaleciendo la capacidad del país para enfrentar crisis de cualquier naturaleza. Así, la defensa se convierte en un pilar de estabilidad y desarrollo integral.